



CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA Y EL CONSEJO GALLEGO DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE GALICIA, PARA LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL Y MERCANTIL EN EL AÑO 2019.

CONVENIO ENTRE O CONSELLO XERAL DO PODER XUDICIAL, A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E O CONSELLO GALEGO DOS PROCURADORES DOS TRIBUNAIS DE GALICIA, PARA A COLABORACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN NO ÁMBITO CIVIL E MERCANTIL NO ANO 2019.

Madrid, a 21 de octubre de 2019

REUNIDOS:

- D. Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, según el Acuerdo (núm. 2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013 y el Real decreto 979/2013, de 10 de diciembre.

- D. Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, actuando en nombre y representación de la Xunta de Galicia, en virtud del Decreto 148/2016, de 13 de noviembre, por el que se nombran los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia, y en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.

- D. Fernando González-Concheiro Álvarez, presidente del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales, cargo que ocupa en virtud del nombramiento efectuado por acuerdo de la sesión del Pleno do Consejo de fecha 20 de marzo de 2018.

EXPONEN:

I. La Ley 5/2012, de 6 de julio (BOE de 7 de julio), regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles incorporando al Derecho español la Directiva 2008/52/CE (DOUE de 24 de mayo de 2008), que aprobó para el ámbito europeo el establecimiento de la mediación como medida para la resolución de asuntos civiles y mercantiles, de entre otros incluidos en la denominada "ADR" (Alternative Dispute Resolution).

REUNIDOS

- D. Carlos Lesmes Serrano, presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial, segundo o Acordo (núm. 2) do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial do 9 de decembro de 2013 e o Real decreto 979/2013, do 10 de decembro.

- D. Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, en virtude do Decreto 148/2016, do 13 de novembro, polo que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia, e no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia.

- D. Fernando González-Concheiro Álvarez, presidente do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, cargo que ocupa en virtude do nomeamento efectuado por acordo da sesión do Pleno do Consello de data 20 de marzo de 2018.

EXPOÑEN:

I. A Lei 5/2012, do 6 de xullo (BOE do 7 de xullo), regula a mediación en asuntos civís e mercantís incorporando ao Dereito español a Directiva 2008/52/CE (DOUE do 24 de maio de 2008), que aprobou para o ámbito europeo o establecemento da mediación como medida para a resolución de asuntos civís e mercantís, de entre outros incluídos na denominada "ADR" (Alternative Dispute Resolution). Así mesmo, o Real





Asimismo, el Real decreto 980/2013, de 13 de diciembre, desarrolla determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Una de las funciones esenciales del Estado de derecho es la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la implantación de una Justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja.

En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que fue cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de justicia.

El objetivo de asegurar un mejor acceso a la Justicia como parte de la política de la Unión Europea encaminada a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios.

II. Entre las ventajas de la mediación es necesario destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes, lo que la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se debe deslindar con claridad. La mediación está construida alrededor de la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.

La mediación puede proporcionar una solución extrajudicial económica y rápida a conflictos en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos adaptados a las necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos resultantes de la mediación se cumplan voluntariamente, y también que se mantenga una relación amigable y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles en asuntos que tengan carácter transfronterizo.

III. El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales es una corporación de Derecho público integrada por los colegios de procuradores de A Coruña,

decreto 980/2013, do 13 de decembro, desenvolve determinados aspectos da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís.

Unha das funcións esenciais do Estado de dereito é a garantía da tutela xudicial dos dereitos dos cidadáns. Esta función implica o reto da implantación dunha Xustiza de calidade capaz de resolver os diversos conflitos que xorden nunha sociedade moderna e, á vez, complexa.

Neste contexto, dende a década dos anos setenta do pasado século veuse recorrendo a novos sistemas alternativos de resolución de conflitos, entre os que destaca a mediación, que foi cobrando unha importancia crecente como instrumento complementario da Administración de xustiza.

O obxectivo de asegurar un mellor acceso á Xustiza como parte da política da Unión Europea encamiñada a establecer un espazo de liberdade, seguridade e xustiza debe abranguer o acceso a métodos tanto xudiciais coma extraxudiciais de resolución de litixios.

II. Entre as vantaxes da mediación cómpre destacar a súa capacidade para dar solucións prácticas, efectivas e rendibles a determinados conflitos entre partes, o que a configura como unha alternativa ao proceso xudicial ou á vía arbitral, dos que se debe deslindar con claridade. A mediación está construída arredor da intervención dun profesional neutral que facilita a resolución do conflito polas propias partes dunha forma equitativa, permitindo o mantemento das relacións subxacentes e conservando o control sobre o final do conflito.

A mediación pode proporcionar unha solución extraxudicial económica e rápida a conflitos en asuntos civís e mercantís, mediante procedementos adaptados ás necesidades das partes. É máis probable que os acordos resultantes da mediación se cumpran voluntariamente, e tamén que se manteña unha relación amigable e viable entre as partes. Estes beneficios son aínda máis perceptibles en asuntos que teñan carácter transfronteirizo.

III. O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais é unha corporación de Dereito público integrada polos colexios de procuradores da Coruña, Lugo, Ourense,





Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo [Decreto 248/2000, de 29 de septiembre, por el que se aprueba la creación del Consejo Gallego de Procuradores (DOG de 19 de octubre)]. Corresponde a su presidente, entre otras funciones, ejercer la representación del Consejo, estándole asignado el ejercicio de cuantos derechos y funciones le atribuyan su estatuto y las relaciones con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personas jurídicas o naturales de cualquier orden, siempre que se trate de materias de carácter general para la profesión, dentro del ámbito del Consejo y sean de la competencia de los organismos autonómicos.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles, en su artículo 5.1 dispone que podrán ser instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de Derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación. Al amparo de dicha norma, teniendo en cuenta que el Consejo Gallego tiene naturaleza de una corporación de Derecho público, y conscientes de la importancia y trascendencia de la mediación como medio extrajudicial de resolución de conflictos, está en el ánimo de sus consejeros constituir el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales en institución mediadora, y a tal fin en la sesión de fecha de 10 de enero de 2014 se aprobó la modificación del apartado cuarto del artículo 5 del Decreto 248/2000 para incluir entre sus finalidades y funciones el arbitraje y el fomento de la mediación.

IV. El Estatuto de autonomía de la Comunidad gallega, aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 20.1 que en relación con la Administración de justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad ejercer todas las facultades que las leyes orgánicas del poder judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.

V. El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales es consciente de la importancia del fomento de la mediación como método de resolución de conflictos, y como corporación de Derecho público que tiene entre sus finalidades y objetos el impulso de la mediación, ha iniciado una serie de actuaciones con el objetivo de promover la cultura de la mediación, de conformidad con las líneas de actuación marcadas por el

Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo [Decreto 248/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba a creación do Consello Galego de Procuradores (DOG do 19 de outubro)]. Correspóndelle ao seu presidente, entre outras funcións, exercer a representación do Consello, estándolle asignado o exercicio de cantos dereitos e funcións lle atribúan o seu estatuto e as relacións cos poderes públicos, entidades, corporacións e persoas xurídicas ou naturais de calquera orde, sempre que se trate de materias de carácter xeral para a profesión, dentro do ámbito do Consello e sexan da competencia dos organismos autonómicos.

A Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación de asuntos civís e mercantís, no seu artigo 5.1 dispón que poderán ser institucións de mediación as entidades públicas ou privadas, españolas ou estranxeiras, e as corporacións de Dereito público que teñan entre os seus fins o impulso da mediación. Ao abeiro da devandita norma, tendo en conta que o Consello Galego ten natureza dunha corporación de Dereito público, e conscientes da importancia e transcendencia da mediación como medio extraxudicial de resolución de conflitos, está no ánimo dos seus conselleiros constituír o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais en institución mediadora, e a tal fin na sesión de data do 10 de xaneiro de 2014 aprobouse a modificación do apartado cuarto do artigo 5 do Decreto 248/2000 para incluír entre as súas finalidades e funcións a arbitraje e o fomento da mediación.

IV. O Estatuto de autonomía da Comunidade galega, aprobado pola Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, establece no seu artigo 20.1 que en relación coa Administración de xustiza, exceptuada a militar, lle corresponde á Comunidade exercer todas as facultades que as leis orgánicas do poder xudicial e do Consello Xeral do Poder Xudicial lle recoñezan ou atribúan ao Goberno do Estado.

V. O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais é consciente da importancia do fomento da mediación como método de resolución de conflitos, e como corporación de Dereito público que ten entre as súas finalidades e obxectos o impulso da mediación, iniciou unha serie de actuacións co obxectivo de promover a cultura da mediación, de conformidade coas liñas de actuación marcadas polo Consello Xeral de Procuradores





Consejo General de Procuradores de España en esta materia, actuaciones que giran sobre dos pilares básicos: el primero de ellos es la formación del colectivo de procuradores gallegos, por lo que a través de la Escuela de Formación Continua para Procuradores, que se encuadra dentro del convenio marco suscrito entre las tres universidades gallegas y el Consejo, se garantiza tanto la formación inicial como la formación permanente de los profesionales; el segundo es la creación del servicio de mediación del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales, a través del cual se asumirán las funciones de mediación previstas en la ley.

VI. El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada a la solución de la controversia por las propias partes. El régimen de la mediación se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, favoreciendo esta alternativa frente a la solución judicial del conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisamente, uno de los ejes de la mediación, que es la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto.

La figura del mediador es la pieza esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las partes.

Se tiene presente el papel, muy relevante en este contexto, de los servicios e instituciones de mediación, que desempeñan una tarea fundamental a la hora de ordenar y fomentar los procedimientos de mediación.

De acuerdo con las manifestaciones anteriores, las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria, y sin perjuicio de la normativa autonómica que se elabore en materia de mediación civil y mercantil,

ACUERDAN:

PRIMERO. OBJETO.

El objeto del presente convenio es establecer un marco estable y permanente de colaboración entre la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales, con el fin de potenciar y

de España nesta materia, actuacións que xiran sobre dous piares básicos: o primeiro deles é a formación do colectivo de procuradores galegos, polo que a través da Escola de Formación Continua para Procuradores, que se encadra dentro do convenio marco suscrito entre as tres universidades galegas e o Consello, se garante tanto a formación inicial coma a formación permanente dos profesionais; o segundo é a creación do servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, a través do cal se asumirán as funcións de mediación previstas na lei.

VI. O modelo de mediación baséase na voluntariedade e libre decisión das partes e na intervención dun mediador, do que se pretende unha intervención activa orientada á solución da controversia polas propias partes. O réxime da mediación baséase na flexibilidade e no respecto á autonomía da vontade das partes, favorecendo esta alternativa fronte á solución xudicial do conflito. É aquí onde se encontra, precisamente, un dos eixes da mediación, que é a deslegalización ou perda do papel central da lei en beneficio dun principio dispositivo que rexe tamén nas relacións que son obxecto do conflito.

A figura do mediador é a peza esencial do modelo, posto que é quen axuda a atopar unha solución dialogada e voluntariamente querida polas partes.

Tense presente o papel, moi relevante neste contexto, dos servizos e institucións de mediación, que desempeñan unha tarefa fundamental á hora de ordenar e fomentar os procedementos de mediación.

De acordo coas manifestacións anteriores, as partes recoñécense mutuamente a capacidade legal necesaria, e sen prexuízo da normativa autonómica que se elabore en materia de mediación civil e mercantil,

ACORDAN:

PRIMEIRO. OBXECTO.

O obxecto do presente convenio é establecer un marco estable e permanente de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, o Consello Xeral do Poder Xudicial e mais o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, co fin de potenciar e





consolidar la mediación como modalidad alternativa de solución de conflictos en el ámbito empresarial y cuya jurisdicción corresponda a los juzgados de lo mercantil y civil en el ámbito de la Comunidad gallega.

A estos efectos, se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en el cual dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

El mediador, de acuerdo con su conformación natural, es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y voluntariamente querida por las partes, y no puede tener funciones decisorias, pero sí de gestión del procedimiento.

SEGUNDO. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales se compromete a:

1. Realizar las actividades previstas en el proyecto que se recoge en este convenio. La dotación de personal dedicada a estos fines estará sometida a las directrices y órdenes del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales, sin que dicho personal tenga relación laboral con la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Destinar los fondos percibidos a la financiación de los gastos necesarios para llevar a cabo las actuaciones de la mediación a que hace referencia la cláusula primera.

3. Poner a disposición de la autoridad judicial, cuando así sea solicitado por esta, información relativa a los posibles destinatarios del objeto del presente convenio.

4. Aportar a la Administración autonómica, cuando le sea solicitada, información sobre las actividades realizadas.

5. Consentir expresamente la inclusión de los datos relevantes de este convenio en los registros públicos que proceda, de conformidad con la disposición adicional del Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, y con el artículo 16 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

6. Dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones objeto del presente

consolidar a mediación como modalidade alternativa de solución de conflitos no ámbito empresarial e cuxa xurisdicción corresponda aos xulgados do mercantil e civil no ámbito da Comunidade galega.

Para estes efectos, enténdese por mediación aquel medio de solución de controversias, calquera que sexa a súa denominación, no cal dúas ou máis partes intentan voluntariamente alcanzar por si mesmas un acordo coa intervención dun mediador.

O mediador, de acordo coa súa conformación natural, é quen axuda a encontrar unha solución dialogada e voluntariamente querida polas partes, e non pode ter funcións decisorias, pero si de xestión do procedemento.

SEGUNDO. OBRIGAS DO BENEFICIARIO.

O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais comprométese a:

1. Realizar as actividades previstas no proxecto que se recolle neste convenio. A dotación de persoal dedicada a estes fins estará sometida ás directrices e ordes do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, sen que o dito persoal teña relación laboral coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

2. Destinar os fondos percibidos ao financiamento dos gastos necesarios para levar a cabo as actuacións da mediación a que fai referencia a cláusula primeira.

3. Poñer á disposición da autoridade xudicial, cando así sexa solicitado por esta, información relativa aos posibles destinatarios do obxecto do presente convenio.

4. Achegar á Administración autonómica, cando lle sexa solicitada, información sobre as actividades realizadas.

5. Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes deste convenio nos rexistros públicos que proceda, de conformidade coa disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e mais co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Dar axeitada publicidade ao carácter público do financiamento das actuacións obxecto do presente





convenio, cumprir todas las condiciones y obligaciones recogidas en él y someterse a las actuaciones de supervisión y control previstas en el mismo, así como observar las demás obligaciones exigidas en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

7. Prestar la colaboración y facilitar cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que les corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y al Consejo de Cuentas.

TERCERO. ACTUACIONES O COMPROMISOS DE LAS PARTES.

A. Del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales:

- Servicio de mediación del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales:

La mediación que realizará el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales comprenderá los servicios de mediación intrajudicial y extrajudicial, en materia civil y mercantil.

El servicio de mediación intrajudicial entenderá de aquellos asuntos que se encuentren inmersos en la vía jurisdiccional, ofreciendo una alternativa a esta para las partes.

El servicio de mediación extrajudicial entenderá de todos los demás asuntos que no estén abarcados en el párrafo anterior.

El servicio de mediación del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales ofrecerá el personal cualificado para la prestación del servicio de mediación intrajudicial y extrajudicial.

El servicio de mediación intrajudicial será gratuito para los usuarios y requerirá la anuencia de la Administración de justicia, que prestará su consentimiento a través de la/s autoridad/es competente/s.

Los mediadores del Servicio de Mediación del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales que presten sus servicios podrán obtener una certificación oficial de su participación en cada asunto, que les reportará el prestigio de ser colaboradores con los tribunales de justicia.

El servicio de mediación extrajudicial será gratuito para aquellos usuarios que en un procedimiento judicial estarían en condiciones de ser beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. Para el resto se establecerán de común acuerdo las tarifas del precio del servicio. El servicio de mediación extrajudicial no tendrá coste alguno para la

convenio, cumprir todas as condicións e obrigas recollidas nel e someterse ás actuacións de supervisión e control previstas no mesmo, así como observar as demais obrigas esixidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

7. Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das funcións de control que lles corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ao Consello de Contas.

TERCEIRO. ACTUACIÓNS OU COMPROMISOS DAS PARTES.

A. Do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais:

- Servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais:

A mediación que realizará o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais comprenderá os servizos de mediación intraxudicial e extraxudicial, en materia civil e mercantil.

O servizo de mediación intraxudicial entenderá daqueles asuntos que se encontren inmersos na vía xurisdiccional, ofrecendo unha alternativa a esta para as partes.

O servizo de mediación extraxudicial entenderá de todos os demais asuntos que non estean abranguidos no parágrafo anterior.

O servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais ofrecerá o persoal cualificado para a prestación do servizo de mediación intraxudicial e extraxudicial.

O servizo de mediación intraxudicial será grauíto para os usuarios e requirirá a anuencia da Administración de xustiza, que prestará o seu consentimento a través da/s autoridade/s competente/s.

Os mediadores do Servizo de Mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais que presten os seus servizos poderán obter unha certificación oficial da súa participación en cada asunto, que lles reportará o prestixio de ser colaboradores cos tribunais de xustiza.

O servizo de mediación extraxudicial será grauíto para aqueles usuarios que nun procedemento xudicial estarían en condicións de ser beneficiarios de asistencia xurídica grauíta. Para o resto estableceranse de común acordo as tarifas do prezo do servizo. O servizo de mediación extraxudicial non terá custo ningún para a





Administración, sin perjuicio de los futuros convenios que puedan llegar a suscribirse o de que la mediación sea incluida entre las prestaciones del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. El mediador recibirá la retribución que corresponda con cargo a las tarifas establecidas.

La prestación del servicio público de mediación es compatible con la actividad privada del servicio de mediación del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales.

El servicio de mediación del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales realizará un seguimiento de los asuntos que hayan tenido entrada. En este sentido, y especialmente:

- Para una mejora de la calidad del servicio, los usuarios lo evaluarán a través de un cuestionario en el que se incluirán indicadores que ayuden a valorar los diversos aspectos del servicio.
- Los mediadores confeccionarán las estadísticas de las mediaciones a fin de obtener datos y porcentajes sobre los resultados obtenidos en los procedimientos derivados o extrajudiciales, haciendo constar indicadores de las materias, si se ha producido o no aceptación de la mediación, si ha habido o no acuerdo en mediación o posteriormente, si se ha abandonado o no la mediación, etc.
- Los mediadores remitirán semestralmente al Consejo General del Poder Judicial las fichas de control estadístico de las operaciones de mediación realizadas.

- Formación:

El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales organizará cursos formativos a efectos de acreditar la formación específica que permita ejercer la mediación en el ámbito de aplicación de este protocolo, dirigidos a aquellos colegiados que no hubiesen aportado la documentación acreditativa de dicha formación en el momento de entrar a formar parte del servicio de mediación como mediadores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y, en su caso, de lo establecido en su desarrollo reglamentario.

Estos cursos proporcionarán a los mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos, de negociación y de ética de la mediación, tanto a nivel

Administración, sen prexuízo dos futuros convenios que se poidan chegar a suscribir ou de que a mediación sexa incluída entre as prestacións do artigo 6 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta. O mediador recibirá a retribución que corresponda con cargo ás tarifas establecidas.

A prestación do servizo público de mediación é compatible coa actividade privada do servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais.

O servizo de mediación do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais realizará un seguimento dos asuntos que tivesen entrada. Neste sentido, e especialmente:

- Para unha mellora da calidade do servizo, os usuarios avaliarano a través dun cuestionario no cal se incluirán indicadores que axuden a valorar os diversos aspectos do servizo.
- Os mediadores confeccionarán as estadísticas das mediacións co fin de obter datos e porcentaxes sobre os resultados obtidos nos procedementos derivados ou extraxudiciais, facendo constar indicadores das materias, se se produciu ou non aceptación da mediación, se houbo ou non acordo en mediación ou posteriormente, se se abandonou ou non a mediación, etc.
- Os mediadores remitirán semestralmente ao Consello Xeral do Poder Xudicial as fichas de control estadístico das operacións de mediación realizadas.

- Formación:

O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais organizará cursos formativos para os efectos de acreditar a formación específica que permita exercer a mediación no ámbito de aplicación deste protocolo, dirixidos a aqueles colexiados que non achegasen a documentación acreditativa da dita formación no momento de entrar a formar parte do servizo de mediación como mediadores, en virtude do disposto no artigo 11.2 da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, e, se for caso, do establecido no seu desenvolvemento reglamentario.

Estes cursos proporcionaranlles aos mediadores os necesarios coñecementos xurídicos, psicolóxicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflitos, de negociación e de ética da mediación, tanto a nivel





teórico como práctico.

Los mediadores ajustarán su actuación a lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como a lo establecido en el Real decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ley, se adherirán al Código de conducta europea y suscribirán el compromiso de confidencialidad y el seguro de responsabilidad civil.

B. De la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia:

La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia se compromete a abonar al Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales los gastos que deriven de la ejecución de este programa de mediación en el ámbito civil y mercantil, con las siguientes tarifas:

- Se abonarán hasta 30 euros por cada hora de los mediadores, hasta un máximo de 150 euros por mediación concluida. En el caso de que una mediación se limite solo a la primera sesión informativa, por haber sido rechazada por las partes o por otra causa, se abonará al mediador interviniente hasta un máximo de 45 €. A estas cantidades se añadirá el IVA que sea de aplicación en cada caso.
- A estos efectos, junto con la documentación que el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales aporte para la justificación de la ejecución del convenio, presentará también un informe detallado donde se recojan todas las mediaciones realizadas, especificando el órgano judicial, el procedimiento, el nombre del mediador o mediadores que intervinieron en la mediación, los beneficiarios y el número de horas de trabajo que se justifican (hasta un máximo de cinco horas por mediación).
- El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales podrá justificar como gastos generales para la ejecución del convenio (gastos de divulgación, material fungible y consumibles, equipamiento para el servicio de mediación y otros gastos de análoga naturaleza), con cargo a la ejecución del convenio, hasta un máximo de 3.000€.

La inversión máxima a que se refiere el presente convenio se fija en **VEINTIÚN MIL EUROS (21.000 euros)** para el año 2019, con cargo a la aplicación

teórico como práctico.

Os mediadores axustarán a súa actuación ao disposto na Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís, así como ao establecido no Real decreto 980/2013, do 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da lei, adheriranse ao Código de conduta europea e suscribirán o compromiso de confidencialidade e mais o seguro de responsabilidade civil.

B. Da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza:

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza comprométese a lle aboar ao Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais os gastos que deriven da execución deste programa de mediación no ámbito civil e mercantil, coas seguintes tarifas:

- Aboaranse ata 30 € por cada hora dos mediadores, ata un máximo de 150 € por mediación concluída. No caso de que unha mediación se limite só á primeira sesión informativa, por ser rexeitada polas partes ou por outra causa, aboaráselle ao mediador interviniente ata un máximo de 45 €. A estas cantidades engadiráselles o IVE que sexa de aplicación en cada caso.
- Para estes efectos, xunto coa documentación que o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais achegue para a xustificación da execución do convenio, presentará tamén un informe detallado onde se recollan todas as mediacións realizadas, especificando o órgano xudicial, o procedemento, o nome do mediador ou mediadores que interviñeron na mediación, os beneficiarios e o número de horas de traballo que se xustifican (ata un máximo de cinco horas por mediación).
- O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais poderá xustificar como gastos xerais para a execución do convenio (gastos de divulgación, material fungible e consumibles, equipamento para o servizo de mediación e outros gastos de análoga natureza), con cargo á execución do convenio, ata un máximo de 3.000€.

O investimento máximo a que se refire o presente convenio fíxase en **VINTE E UN MIL EUROS (21.000 euros)** para o ano 2019, con cargo á aplicación





presupuestaria 05.22.131A.481.0, con el siguiente desglose:

- Hasta un máximo de 18.000 € para el abono de las mediaciones efectivamente realizadas de acuerdo con lo establecido anteriormente.
- Hasta un máximo de 3.000 € para el abono al Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales de los gastos generales para la ejecución de este convenio.

La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia hará el pago al Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales una vez que presente la siguiente documentación justificativa:

- Certificación de la Intervención o del órgano que tenga atribuidas las facultades de control de la toma de razón de contabilidad y del cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
- Declaración del conjunto de ayudas solicitadas – tanto de las aprobadas o concedidas como de las pendientes de resolución– para el mismo proyecto a las administraciones públicas competentes o a sus entidades vinculadas o dependientes, así como a los entes privados.
- Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de no tener ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
- Cualquier otra documentación o material que el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales considere necesario presentar para una mejor justificación de las actuaciones objeto del presente convenio.

El plazo límite para presentar dicha documentación justificativa se fija en el 29 de noviembre de 2019.

Procederá el reintegro parcial o total de los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión, en los términos previstos en el título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, los criterios de gradación de

orramentaria 05.22.131A.481.0, coa seguinte desagregación:

- Ata un máximo de 18.000 € para o aboamento das mediacións efectivamente realizadas de acordo co establecido anteriormente.
- Ata un máximo de 3.000 € para o aboamento ao Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais dos gastos xerais para a execución deste convenio.

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza faralle o pagamento ao Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais unha vez que presente a seguinte documentación xustificativa:

- Certificación da Intervención ou do órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón de contabilidade e do cumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención, de acordo co establecido no artigo 28.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Declaración do conxunto de axudas solicitadas – tanto das aprobadas ou concedidas coma das pendentes de resolución– para o mesmo proxecto ás administracións públicas competentes ou ás súas entidades vinculadas ou dependentes, así como aos entes privados.
- Declaración responsable de se achar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, así como de non ter ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
- Calquera outra documentación ou material que o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais considere necesario presentar para unha mellor xustificación das actuacións obxecto do presente convenio.

O prazo límite para presentar a devandita documentación xustificativa fíxase no 29 de novembro de 2019.

Procederá o reintegro parcial ou total dos fondos percibidos no suposto de incumplimento das condicións establecidas para a súa concesión, nos termos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, ao abeiro do disposto no artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos





los posibles incumplimientos para determinar la cantidad a minorar serán los siguientes:

- a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de los gastos subvencionables o de la obligación de justificación dará lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida.
- b) Cualquier otro incumplimiento parcial de los fines para los que se ha concedido la ayuda, de la realización parcial de la inversión subvencionable o de la obligación de justificación se considerará incumplimiento parcial y dará lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, a la pérdida del derecho al cobro en el porcentaje correspondiente a la inversión no efectuada o no justificada.
- c) La realización de modificaciones no autorizadas en el presupuesto subvencionable supondrá la pérdida del derecho al cobro.

C. Del Consejo General del Poder Judicial:

Corresponde al Consejo General del Poder Judicial:

- Impulsar la mediación intrajudicial entre los jueces y magistrados, contribuyendo al fomento de la cultura de la mediación y dotándolos al efecto de herramientas en el ejercicio de su labor jurisdiccional.
- Remover obstáculos con vistas a la colaboración institucional o corporativa necesaria para la puesta en marcha de la iniciativa.
- Analizar el resultado de la actividad mediadora e incluir los datos recabados en la información relativa a la mediación intrajudicial realizada en todo el territorio español que publica anualmente el Consejo General del Poder Judicial en la extranet de su web.
- Velar por que la mediación que se desarrolla en los juzgados sea de calidad.

El presente convenio no genera gastos para el Consejo General del Poder Judicial.

CUARTO. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE REMITIR A MEDIACIÓN.

Los asuntos susceptibles de ser derivados a mediación a que se refiere este convenio serán todos aquellos de la jurisdicción mercantil y civil en el ámbito de la Comunidad gallega.

Las partes firmantes y las que en el futuro se puedan

para determinar a cantidade a minorar serán os seguintes:

- a) O incumprimento total dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencionables ou da obriga de xustificación dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, de ser o caso, ao reintegro da totalidade da axuda concedida.
- b) Calquera outro incumprimento parcial dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización parcial do investimento subvencionable ou da obriga de xustificación considerárase incumprimento parcial e dará lugar á perda do dereito ao cobro ou, de ser o caso, á perda do dereito ao cobro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.
- c) A realización de modificacións non autorizadas no orzamento subvencionable suporá a perda do dereito ao cobro.

C. Do Consello Xeral do Poder Xudicial:

Correspóndelle ao Consello Xeral do Poder Xudicial:

- Impulsar a mediación intraxudicial entre os xuíces e maxistrados, contribuíndo ao fomento da cultura da mediación e dotándoos para o efecto de ferramentas no exercicio do seu labor xurisdiccional.
- Remover obstáculos con vistas á colaboración institucional ou corporativa necesaria para a posta en marcha da iniciativa.
- Analizar o resultado da actividade mediadora e incluír os datos recadados na información relativa á mediación intraxudicial realizada en todo o territorio español que publica anualmente o Consello Xeral do Poder Xudicial na extranet da súa web.
- Velar por que a mediación que se desenvolva nos xulgados sexa de calidade.

O presente convenio non xera gastos para o Consello Xeral do Poder Xudicial.

CUARTO. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE REMITIR CARA Á MEDIACIÓN.

Os asuntos susceptibles de ser derivados á mediación a que se refire este convenio serán todos aqueles da xurisdicción mercantil e civil no ámbito da Comunidade galega.

As partes asinantes e as que no futuro se poidan





adherir a este convenio impulsarán la mediación civil y mercantil, y ofrecerán dicho instrumento de solución alternativa de conflictos a las partes en litigio en los procedimientos sometidos al conocimiento de los juzgados de Galicia con competencia en materia civil y mercantil de conformidad con lo regulado en la Ley orgánica del poder judicial.

Con el objeto de conseguir la mayor eficacia, se establece una duración no superior a un mes para el proceso de mediación, que se computará desde la celebración de la primera reunión con los mediadores una vez aceptada la mediación, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga previa petición de los mediadores, y de forma justificada, por un mes más. Excepcionalmente podrá establecerse una prórroga por un plazo superior cuando se justifique debidamente, y sin que en ningún caso se superen los tres meses de duración.

Principios esenciales del proceso de mediación.

- **Voluntariedad.**- Se respetarán en todo caso el principio de voluntariedad en la aceptación del proceso de mediación.

- **Confidencialidad.**- La información que se utilice en el procedimiento de mediación permanecerá reservada, y únicamente se informará sobre la consecución o no de un acuerdo. En caso de que la mediación no continúe por desistir alguna de las partes, únicamente se informará al juez de este hecho, que carecerá de toda incidencia en el enjuiciamiento posterior. En todo caso el mediador está obligado a informar al juez y al Ministerio Fiscal de cualquier hecho delictivo.

- **Igualdad de las partes.**- Se garantizará la plena igualdad y libertad de las partes, interrumpiéndose la mediación cuando se advierta la existencia de cualquier otra causa que rompa este principio.

- **Homologación de acuerdos.**- El acuerdo total o parcial alcanzado, en su caso, en el proceso de mediación será comunicado al juzgado por el mediador, que entregará a las partes el acuerdo de mediación (total o parcial) y acreditará este punto al juzgado a efectos de constancia y respetando el principio de confidencialidad, retomándose el proceso con los efectos que correspondan a efectos de su homologación.

- Y los demás establecidos en el título II de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

QUINTO. INCOMPATIBILIDADES.

Serán motivos de incompatibilidad que obligarán a renunciar a la realización de la mediación, además de los

adherir a este convenio impulsarán a mediación civil e mercantil, e ofrecerán o dito instrumento de solución alternativa de conflitos ás partes en litixio nos procedementos sometidos ao coñecemento dos xulgados de Galicia con competencia en materia civil e mercantil de conformidade co regulado na Lei orgánica do poder xudicial.

Co obxecto de conseguir a maior eficacia, establécese unha duración non superior a un mes para o proceso de mediación, que se computará dende a celebración da primeira xuntanza cos mediadores unha vez aceptada a mediación, sen prexuízo da posibilidade de prórroga tras pedimento dos mediadores, e de forma xustificada, por un mes máis. Excepcionalmente poderase establecer unha prórroga por un prazo superior cando se xustifique debidamente, e sen que en ningún caso se superen os tres meses de duración.

Principios esenciais do proceso de mediación.

- **Voluntariedade.**- Respetarase en todo caso o principio de voluntariedade na aceptación do proceso de mediación.

- **Confidencialidade.**- A información que se utilice no procedemento de mediación permanecerá reservada, e unicamente se informará sobre a consecución ou non dun acordo. No caso de que a mediación non continúe por desistir algunha das partes, unicamente se informará ao xuíz deste feito, que carecerá de toda incidencia no axuizamento posterior. En todo caso o mediador está obrigado a informar ao xuíz e mais ao Ministerio Fiscal de calquera feito delituoso.

- **Igualdade das partes.**- Garantirase a plena igualdade e liberdade das partes, interrompéndose a mediación cando se advirta a existencia de calquera outra causa que rompa este principio.

- **Homologación de acordos.**- O acordo total ou parcial acadado, se for o caso, no proceso de mediación seralle comunicado ao xulgado polo mediador, que lles entregará ás partes o acordo de mediación (total ou parcial) e lle acreditará este punto ao xulgado para efectos de constancia e respectando o principio de confidencialidade, retomándose o proceso cos efectos que correspondan para efectos da súa homologación.

- E os demais establecidos no título II da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís.

QUINTO. INCOMPATIBILIDADES.

Serán motivos de incompatibilidade que obrigarán a renunciar á realización da mediación, alén dos





legalmente previstos, los siguientes:

- a) Tener vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con alguna de las partes intervinientes en la mediación, o con sus asesores, representantes legales o mandatarios, así como compartir el despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- b) Haber intervenido profesionalmente con anterioridad en el asunto objeto de mediación.
- c) Tener interés directo, de cualquier tipo, en el asunto objeto de su actuación, o una manifiesta vinculación –directa o indirecta– económica, laboral o de otro tipo que pueda comprometer su independencia profesional.
- d) Cualquier otro supuesto establecido legal o reglamentariamente.

SEXTO. COMPROMISOS DE LOS MEDIADORES.

En cualquier caso se cumplirá, en cuanto a los requisitos que habrá de observar el mediador, lo dispuesto en el Real decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Asimismo, el mediador se compromete a:

- a) Realizar los cursos y seminarios de formación que a este efecto sean convocados por el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales.
- b) Aceptar los encargos de mediación entre las partes en un proceso, a no ser que incurra en alguno de los supuestos de incompatibilidad recogidos.
- c) Cumplir los plazos establecidos en el convenio en relación con la duración máxima del procedimiento de mediación.
- d) Respetar las disposiciones existentes en materia de incompatibilidad.
- e) Garantizar la debida confidencialidad y secreto en su actuación como mediadores.
- f) Enviar al Consejo General del Poder Judicial, con carácter semestral, la ficha de recogida de datos solicitada por este.

SÉPTIMO. BAJA DEL MEDIADOR.

Serán causas de baja del mediador, además de la voluntaria, las siguientes:

- a) La pérdida de la condición de colegiado.
- b) El incumplimiento de las condiciones o

legalmente previstos, os seguintes:

- a) Ter vínculo de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o cuarto grao con algunha das partes intervinientes na mediación, ou cos seus asesores, representantes legais ou mandatarios, así como compartir o despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.
- b) Ter intervido profesionalmente con anterioridade no asunto obxecto de mediación.
- c) Ter interese directo, de calquera tipo, no asunto obxecto da súa actuación, ou unha manifiesta vinculación –directa ou indirecta– económica, laboral ou doutro tipo que poida comprometer a súa independencia profesional.
- d) Calquera outro suposto establecido legal ou reglamentariamente.

SEXTO. COMPROMISOS DOS MEDIADORES.

En calquera caso cumprirase, en canto aos requisitos que terá que observar o mediador, o disposto no Real decreto 980/2013, do 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da Lei 5/2012, do 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís.

Así mesmo, o mediador comprométese a:

- a) Realizar os cursos e seminarios de formación que para este efecto sexan convocados polo Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais.
- b) Aceptar as encargas de mediación entre as partes nun proceso, non sendo que incorra nalgún dos supostos de incompatibilidade recollidos
- c) Cumprir os prazos establecidos no convenio en relación coa duración máxima do procedemento de mediación.
- d) Respetar as disposicións existentes en materia de incompatibilidade.
- e) Garantir a debida confidencialidade e segredo na súa actuación como mediador.
- f) Enviar ao Consello Xeral do Poder Xudicial, con carácter semestral, a ficha de recollida de datos solicitada por este.

SÉTIMO. BAJA DO MEDIADOR.

Serán causas de baixa do mediador, ademais da voluntaria, as seguintes:

- a) A perda da condición de colexiado.
- b) O incumprimento das condicións ou





compromisos del convenio.

- c) La incoación de procedimiento penal o expediente disciplinario.
- d) La actuación a sabiendas de la existencia de incompatibilidad.
- e) El rechazo injustificado de la realización de las tareas encomendadas.

OCTAVO. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Con carácter general, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, general de subvenciones de Galicia, se considerarán gastos subvencionables aquellos que de modo indudable respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen dentro del período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha límite de justificación establecida en el convenio. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

Los costes indirectos –tales como dietas, viajes o consumibles– formarán parte de la justificación de la subvención, siempre que sean imputados por el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales a la actividad subvencionada y en todo caso en la medida en que tales costes correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad, y con fecha de justificación comprendida entre el 1 de enero de 2019 y la fecha límite de justificación.

NOVENO. CONTROL.

El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales se someterá a las actuaciones de comprobación que la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia le pueda requerir para la debida justificación de los fines de este convenio, así como también a las de control financiero que le corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma en relación con los pagos realizados.

La Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia podrá solicitar en cualquier momento los documentos que considere oportunos para la debida justificación del gasto.

En todo caso, y únicamente a efectos estadísticos, el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales informará trimestralmente a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia sobre los procedimientos de mediación realizados por los mediadores, comunicando el número

compromisos do convenio.

- c) A incoación de procedemento penal ou expediente disciplinario.
- d) A actuación a sabendas da existencia de incompatibilidade.
- e) O rexeitamento inxustificado da realización das tarefas encomendadas.

OITAVO. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Con carácter xeral, e de acordo co establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, xeral de subvencións de Galicia, consideraranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2019 e a data límite de xustificación establecida no convenio. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

Os custos indirectos –tales como axudas de custo, viaxes ou consumibles– formarán parte da xustificación da subvención, sempre que sexan imputados polo Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais á actividade subvencionada e en todo caso na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade, e con data de xustificación comprendida entre o 1 de xaneiro de 2019 e a data límite de xustificación.

NOVENO. CONTROL.

O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais someterase ás actuacións de comprobación que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza lle poida requirir para a debida xustificación dos fins deste convenio, así como tamén ás de control financeiro que lle corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación cos pagamentos realizados.

A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza poderá solicitar en calquera momento os documentos que coide oportunos para a debida xustificación do gasto.

En todo caso, e unicamente para efectos estadísticos, o Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais informará trimestralmente á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sobre os procedementos de mediación realizados polos mediadores, comunicando o número de





de mediaciones realizadas, el juzgado de procedencia y la duración de cada una de ellas, así como el resultado final de los procedimientos.

El Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales remitirá a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia una memoria anual en la que se recojan y describan todas las actuaciones llevadas a cabo por el mediador.

DÉCIMO. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS.

Este convenio será objeto de publicación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, de la Administración pública gallega. Asimismo, se incluirá en el Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios, de conformidad con el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, y con el artículo 16 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Igualmente, las partes se comprometen a observar lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.

No obstante, los partícipes en el proceso mediador procederán a la cumplimentación voluntaria de una encuesta sobre el grado de satisfacción del servicio de mediación.

Las partes firmantes del convenio manifiestan su consentimiento para que los datos personales que constan en este convenio, así como el resto de las especificaciones contenidas en el mismo, puedan ser publicados en el Portal de transparencia y Gobierno abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 18 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se comunicará la suscripción de este convenio a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que opera como sistema nacional de publicidad de subvenciones.

Las partes firmantes vendrán obligadas en materia de protección de datos a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27

mediación realizadas, o xulgado de procedencia e a duración de cada unha delas, así como o resultado final dos procedementos.

O Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais remitiralle á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza unha memoria anual na que se recollan e describan todas as actuacións levadas a cabo polo mediador.

DÉCIMO. CONFIDENCIALIDADE DA INFORMACIÓN E DOS RESULTADOS.

Este convenio será obxecto de publicación, de acordo co previsto na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Administración pública galega. Así mesmo, incluírase no Rexistro Público de Axudas, Subvencións e Convenios, de conformidade co Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e mais co artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Igualmente, as partes comprométese a observar o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no que se refire ao acceso limitado aos propios interesados en relación cos documentos que conteñan datos referentes á intimidade das persoas.

Non obstante, os partícipes no proceso mediador procederán á cubrición voluntaria dunha enquisa sobre o grao de satisfacción do servizo de mediación.

As partes asinantes do convenio manifiestan o seu consentimiento para que os datos persoais que constan neste convenio, así como o resto das especificacións contidas no mesmo, poidan ser publicados no Portal de transparencia e Goberno aberto.

En cumprimento do disposto nos artigos 18 e 20.8 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, comunicárase a suscripción deste convenio á Base de Datos Nacional de Subvencións, que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións.

As partes asinantes estarán obrigadas en materia de protección de datos a cumprir co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27





de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Este convenio se publicará en el *Boletín Oficial del Estado* y se inscribirá en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Asimismo, se publicará en el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE de 10 de diciembre).

UNDÉCIMO. COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se crea la comisión de seguimiento del convenio, a la que corresponde velar por el cumplimiento de lo pactado y por la buena marcha del mismo, sin perjuicio de que en su seno pueda tratarse de cualquier otro asunto vinculado a su objeto y relacionado con la mediación y la Administración de justicia.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán resueltas de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la comisión.

Este órgano estará integrado por los siguientes miembros:

- Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
- El titular de la Dirección General de Justicia de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, o persona en quien delegue.
- El presidente del Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales, o persona en quien delegue.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, la persona que ejerza la jefatura del Servicio de Coordinación Técnico-Administrativa de la Dirección General de Justicia.

La comisión se reunirá de modo ordinario cada tres meses con el objeto de garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar la experiencia; y con carácter extraordinario cuando sea necesario, a

de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e coas demais disposicións vixentes sobre a materia.

Este convenio publicarase no *Boletín Oficial del Estado* e inscribirase no Rexistro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, de acordo co previsto na Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. Así mesmo, publicarase no Portal da Transparencia do Goberno de España, de acordo co previsto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (BOE do 10 de decembro).

DÉCIMO PRIMEIRO. COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN E SEGUIMIENTO.

Segundo o previsto na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, créase a comisión de seguimento do convenio, á que lle corresponde velar polo cumprimento do pactado e pola boa marcha do mesmo, sen prexuízo de que no seu seo se poida tratar de calquera outro asunto vinculado co seu obxecto e relacionado coa mediación e a Administración de xustiza.

As controversias sobre a interpretación e execución do presente convenio serán resoltas de mutuo acordo entre as partes no seo da comisión.

Este órgano estará integrado polos seguintes membros:

- Un representante do Consello Xeral do Poder Xudicial.
- O titular da Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ou persoa en quen delegue.
- O presidente do Consello Galego dos Procuradores dos Tribunais, ou persoa en quen delegue.

Actuará como secretario, con voz pero sen voto, a persoa que exerza a xefatura do Servizo de Coordinación Técnico-Administrativa da Dirección Xeral de Xustiza.

A comisión reunirase de xeito ordinario cada tres meses co obxecto de garantir a calidade do servizo, corrixiar disfuncionalidades e analizar a experiencia; e con carácter extraordinario cando sexa necesario, tras





petición de cualquiera de las partes. A tales efectos la comisión podrá requerir la presencia del equipo mediador.

DUODÉCIMO. VIGENCIA DEL CONVENIO.

La vigencia del presente convenio será la comprendida entre su firma y el 31 de diciembre de 2019; no obstante, abarcará las acciones objeto del convenio realizadas desde el 1 de enero de 2019.

DECIMOTERCERO. NATURALEZA JURÍDICA Y CUESTIONES LITIGIOSAS.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas establecidas en él, quedando fuera del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con independencia de que, al amparo de lo previsto en el artículo 4 de dicha norma, le sean de aplicación los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que se pudiesen presentar.

Se regirá, asimismo, por la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

La Administración gozará de todas las prerrogativas inherentes a la naturaleza administrativa del convenio.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que se puedan suscitar entre las partes, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

DECIMOCUARTO. RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.

Será causa de resolución del presente convenio el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a otra parte para la resolución del mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes.

DECIMOQUINTO. OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.

En caso de finalización del presente convenio, cualquiera que sea la causa, las partes se comprometen a concluir las obligaciones y compromisos pendientes asumidos con anterioridad a la fecha de finalización del

pedimento de cualquiera de las partes. Para tales efectos la comisión podrá requerir a presencia do mediador.

DÉCIMO SEGUNDO. VIXENCIA DO CONVENIO.

A vixencia do presente convenio será a comprendida entre a súa sinatura e o 31 de decembro de 2019; non obstante, abranguerá as accións obxecto do convenio realizadas dende o 1 de xaneiro de 2019.

DÉCIMO TERCEIRO. NATUREZA XURÍDICA E CUESTIÓNS LITIXIOSAS.

O presente convenio ten natureza administrativa e rexeráse polas cláusulas establecidas nel, quedando fóra do ámbito de aplicación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, con independencia de que, ao abeiro do previsto no artigo 4 da dita norma, lle sexan de aplicación os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que se poidan presentar.

Rexeráse, así mesmo, pola Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e mais polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A Administración gozará de todas as prerrogativas inherentes á natureza administrativa do convenio.

A orde xurisdiccional contencioso-administrativa será a competente para resolver as cuestións litixiosas que se poidan suscitar entre as partes, conforme o establecido nos artigos 1 e 2 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

DÉCIMO CUARTO. RESOLUCIÓN DO CONVENIO.

Será causa de resolución do presente convenio o incumprimento por unha das partes de calquera das obrigas contraídas e/ou cláusulas establecidas nel, así como o incumprimento da normativa vixente na materia, o que facultará outra parte para a resolución do mesmo, quedando automaticamente anulados todos os dereitos derivados, pero non así as obrigas inherentes.

DÉCIMO QUINTO. OBRIGA DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISOS.

En caso de finalización do presente convenio, calquera que sexa a causa, as partes comprométense a concluir as obrigas e compromisos pendentes asumidos con anterioridade á data de finalización do mesmo.





Consejo General del Poder Judicial



XUNTA DE GALICIA



mismo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el presente convenio de colaboración en el lugar y fecha arriba indicados.

E en proba de conformidade con canto antecede, e para a debida constancia, asíñase o presente convenio de colaboración no lugar e data arriba indicados.

POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carlos Lesmes Serrano

POR LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMONES. PÚBLICAS Y JUSTICIA



Alfonso Rueda Valenzuela

POR EL CONSEJO GALLEGO DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES

Fernando González-Concheiro Álvarez